

La financiarización ¿hay gobiernos de izquierdas y de derechas?

Francisco LETAMENDIA

Francisco Letamendia Belzunce (Donostia, 1944) – profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)– es autor de numerosos artículos y libros relacionados con el nacionalismo y la política vasca, con la acción colectiva y con el mundo del trabajo. Precisamente, una de sus últimas obras publicadas ha sido *Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo* (2009. Madrid: Editorial Tecnos).

El sistema financiero ha agravado la crisis que acosa desde fines de 2007 a la economía occidental, y por ende a la de todo el mundo. Su hegemonía en el seno del capitalismo mundial y la complejísima ingeniería de sus instrumentos, que sirvió para ocultar durante décadas la superproducción creciente, ha determinado, por la naturaleza depredadora de sus prácticas, el carácter devastador que presenta la crisis actual.

El régimen fordista fue una reacción –tardía– a la gran crisis de superproducción que se inició en Wall Street en 1929; su instrumento fue el Estado keynesiano del Bienestar, con políticas públicas de

demanda y un aumento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular. Las recetas del posfordismo fueron desde los años 80 bien distintas: políticas públicas de oferta, estrategia empresarial de innovación al servicio de la obtención de nichos de excelencia en los mercados globales, descenso de las rentas del trabajo en beneficio del aumento de las del capital con el pretexto de la competitividad... Pero todo ello tendía a disparar en fecha la superproducción; lo que efectivamente ha ocurrido en los últimos años.

La estrategia del capital para superar, o más bien disfrazar, la crisis de superproducción/subconsumo ha hecho de la financiarización su elemento central. La financiarización, consistente en el conjunto de mecanismos engendrados por la acumulación del capital de préstamo a interés, se ha superpuesto a la producción de valor de la economía real formada por la agricultura, la industria y los servicios. Todo se compraba y se vendía a crédito, con la consiguiente desconexión entre la economía real y la financiera.

El capital financiero creció además desmesuradamente por el aumento, entre otras cosas, de los fondos acumulados en los sistemas de jubilación privados: lo que ha redundado –véase el caso de España– en la erosión inducida de la jubilación pública. Las instituciones de regulación tradicionales se mostraron incapaces de gestionar una situación caracterizada por el predominio de la opacidad y de una ingeniería financiera que dejaba enormes partidas fuera de balance, así como por la proliferación de empresas financieras distintas de los bancos y de agencias de evaluación de riesgos que engañaban a sus clientes.

Las multinacionales y los grupos empresariales imitaron los métodos de los organismos financieros. Explotando las ventajas del crédito barato, trajeron gran parte de los recursos de la inversión y los dedicaron a la financiación de fusiones y adquisición de otras empresas, y a pagar altos divi-

dendos a los accionistas. Pero al mantener en bajos niveles la creación de empleo, la inversión y los salarios, el capital productivo y de servicios mantuvo también bajo el nivel de la demanda, alimentando la dinámica, subterránea durante largo tiempo, del subconsumo.

Sin discusión pública ni debates parlamentarios, los grupos financieros eufemísticamente llamados "mercados" reinan olímpicamente inatacables en la cima de una cascada de explotaciones en la que los *trusts* bancarios exprimen a las multinacionales, éstas a las grandes empresas nacionales, quienes sacan el jugo a su vez a las PyMEs, hasta llegar a la ingente cantera de los explotados trabajadores y ciudadanos de a pie. Para ello, los "mercados" someten férreamente a sus intereses a todas las escalas del poder político, especialmente a los Estados, convirtiendo en superfluos parlamentos y gobiernos y haciendo de la palabra democracia una superchería.

En la Unión Europea, las cumbres de Davos han hecho visible cómo funcionan sus mecanismo de transmisión de órdenes, y qué efectos han tenido sobre gobiernos como el griego, el irlandés y el español. En la reunión del Foro Económico Mundial (World Economic Center) en la población suiza de Davos de enero de 2010, presidentes de Gobierno y PDGs de multinacionales y grandes empresas acudieron a escuchar los dictámenes de los portavoces financieros. Hubiera sido fácil averiguar la lista de los asistentes; el no hacerlo forma parte de una estrategia que convierte a los "mercados" en entes inescrutables cuyos criterios e intereses adquieren el carácter ineluctable de los fenómenos atmosféricos.

Zapatero, a quien sus asesores habían advertido que "vienen a por nosotros", sometido a la presión de los "mercados", presentó para aplacarlos un plan de austeridad con el triple compromiso de un plan de ajuste, una reforma laboral y un cambio del sistema de pensiones de jubilación; lo que suponía (algo que también se le exigió) un nuevo

modelo de Estado alejado de toda veleidad socialdemócrata. Sus consecuencias, conocidas de todos, se han ido desgranando a lo largo de los años 2010 y 2011.

Sometimientos de gobernantes a directrices exteriores tan manifiestamente contrarias a los intereses de los ciudadanos, que han cavado su tumba política en Grecia, España, Portugal, etc., exigen una explicación de por qué y cómo el capital financiero impone su lógica y su disciplina a los Estados. El dilema es aceptar tal lógica o luchar contra ella.

El capital ha provocado primero el déficit de los Estados y lo ha utilizado después en su propio beneficio. En efecto, trusts y multinacionales exigen subvenciones y trabajo barato a los Estados, al tiempo que controlan los mecanismos de la globalización que les permite no tributar en ellos, con lo que los desangran. Además, la precariedad laboral y sus prácticas de deslocalización multiplican el número de los damnificados que necesitan asistencia pública, cuando precisamente las arcas estatales están exhaustas. En la Unión Europea ello ocurre especialmente en los Estados dependientes, véase España.

La diferencia entre gastos e ingresos estatales genera, como en el caso de los particulares, la necesidad de endeudarse. Para paliar el déficit los gobiernos emiten bonos de la deuda pública. El conjunto de la deuda adquirida por los bancos extranjeros (los infalibles e inescrutables "mercados"), se repartía en 2010 entre el 12% de Portugal, el 32% de Irlanda, el 11% de Grecia, y el 43% de España.

Nada impediría que la deuda fuese adquirida, en vez de por la banca privada, por las instituciones públicas, el Banco Central de cada Estado, o el Banco Central Europeo; lo que eliminaría las presiones de entidades que se guían solamente por la ley de la máxima ganancia. Pero en la Unión Europea ello no es así. Por imposición de los trusts fi-

nancieros (alemanes sobre todo), el Banco Central Europeo no puede comprar deuda; sólo puede prestar dinero barato, a los bancos al 1% de interés –cuando ellos obtienen enormes beneficios del 3 a 4 %-; y a los Gobiernos para que paguen a los bancos los intereses de la deuda.

Pero los trusts financieros no se contentan con esta fuente ingente de beneficios, que enriquece enormemente a unos pocos y empobrece a todos los demás; cuando dudan de la solvencia económica de los gobiernos les cobran primas de riesgo, lo que genera cargas insostenibles que pueden llevarlos a la bancarrota –o a la necesidad de un rescate europeo con dinero público, como ha ocurrido en Grecia y Portugal-. Las presiones económicas brutales a que son sometidos los Estados se duplican con una presión ideológica de plegamiento al credo neo-liberal de los “mercados”, y se triplican con las presiones políticas de los demás Estados socios, que temen, por ejemplo, que un hipotético rescate de España pueda llevarse por delante al euro. Ello explica el sometimiento masoquista de los estadistas europeos auto-suicidados.

Una consecuencia añadida de la financiarización ha sido la desaparición de las diferencias entre gobiernos de derecha e izquierda. Unos y otros han aplicado políticas públicas idénticas. Los partidos gobernantes se han hundido, provocando el ascenso como la espuma de su oposición, oposición de izquierdas (aunque tal denominación sea un eufemismo) si son de derecha (gobiernos de Merkel en Alemania y de Sarkozy en Francia), oposición de derechas si son de “izquierda” (gobierno de Zapatero en España). Aquí tendremos desgraciadamente la ocasión de comprobar que, una vez en el poder, las antiguas oposiciones aplicarán medidas idénticas, (como veremos en la España de Rajoy), si no peores, a las de los gobiernos derrotados.

Hoy más que nunca, la lucha por liberarse de la miserable condición a la que nos somete a todos el capital financiero es una lucha política, una lucha por la soberanía. Es posible que los ciudadanos

españoles de a pie que asumen esta lógica con su proyecto nacional ya hecho empiecen a comprender la lucha por la soberanía de quienes tenemos además nuestro propio proyecto nacional por construir, como los vascos. Y es deseable que ellos y nosotros nos demos cuenta de que, finalmente, una y otra son la misma lucha.